

PRESENCIA

DIRECTOR
GERENTE

HUASCAR CAJAS KAUFFMANN
ARMANDO MARIACA VALDEZ

Reacción de la Gulf ante la nacionalización

No creemos que haya habido alguien tan ingenuo como para pensar que, ante la nacionalización de sus bienes, la Bolivian Gulf iba a quedarse cruzada de manos, sin defender lo que considera sus intereses. Tenía que esperarse una reacción desfavorable y, junto con ella, la apelación a todos los medios «económicos y políticos» para presionar a fin de obtener lo más posible.

Por eso, a nadie habrá de sorprender la noticia sobre la conferencia de prensa convocada por la empresa para exponer sus puntos de vista y anunciar los recursos de que echará mano contra la nacionalización.

Pero cabe llamar la atención sobre algunos de esos puntos que no hacen sino confirmar la mentalidad con que la empresa ha encarado siempre sus relaciones con los gobiernos de los países en los que opera. Es, en ese sentido, lo que hace la empresa, una advertencia a todos éstos.

Más de una vez se ha hecho notar y no siempre por adversarios de la Gulf que la empresa ha hecho cuanto estaba en sus manos para dejar en Bolivia una imagen negativa sobre sus actividades; con las actuaciones anunciadas, esa imagen ha de empeorar, si cabe, y no creemos que sólo en nuestro país. Pero se trata de amenazas o de ideas que no nos causarán mayor daño que el que podía prudentemente preverse cuando la nacionalización se produjo.

La empresa invoca la enmienda Hickenlooper y exige que se la aplique a nuestro país. No sabemos si se llegará a ese extremo. Pero lo evidente es que aquella medida ha sido unánimemente calificada de extremadamente imperialista, de modo que el invocarla tiene que inquietar a todas las naciones en que Gulf tiene intereses. En cuanto a Bolivia, consideramos que el anuncio, lejos de abrir canales de entendimiento o crear un principio de buena voluntad, ha de lograr precisamente lo contrario. Aquí ya cabe hablar de dignidad nacional, sin discusiones, porque se ha tomado simplemente el camino de la intimidación. No creemos que nuestro pueblo o ningún gobierno «inclusive si llegara al poder uno favorable a la Gulf» se inclinarían ante estas amenazas que, por si faltara uno todavía, han puesto un sello final a las actividades de la Gulf en Bolivia.

En cuanto a las conversaciones que la empresa dice que está dispuesta a proseguir, parece que ellas se refieren a la mayor participación del Estado en la producción. No creemos que sea oportuna una sugestión en ese sentido, porque los hechos han ido ya mucho más lejos. Si la Gulf o los propiciadores extranjeros del Código Davenport hubieran tenido sentido de previsión y de equidad, quizá la nacionalización no hubiera contado con el respaldo masivo con que contó. Hablar, en estos momentos, de una reanudación de conversaciones con aquel fin es sencillamente ser ciego.

En cuanto a aquello de que el problema de la indemnización debería tratarse ante un tribunal internacional, revela simplemente el respeto que la Gulf tiene a la ley y su autosuficiencia, por suerte no reconocida por todos. Aunque en el primitivo proyecto sobre petróleo y en el Código que fue puesto en vigencia por Decreto, se aceptó la imposición de que Bolivia se colocara ante las empresas como un ente soberano ante otros entes soberanos, tamaño desatino fue corregido cuando el Código fue transformado en ley. La Gulf incurre ahora en el mismo desatino, al juzgarse en igualdad de condiciones que un Estado soberano. Eso es algo que deben tomar en cuenta los países en que la empresa sigue operando. Por lo demás, la empresa, si es, como dice, respetuosa de las leyes, lo menos que deberá hacer es someterse a ellas; por lo menos que recuerde la Constitución boliviana que dice, en su artículo 24: «Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas». Lo cual no quiere decir sino que el proceso de nacionalización no se llevará ante ningún tribunal internacional y que hay que poner en duda la honestidad con que la Gulf afirma que respeta y ha respetado nuestras leyes.